

Familias vulnerables los utilizan principalmente para construir una vivienda: Denuncian arriendo y venta de terrenos fiscales ocupados ilegalmente

Según Bienes Nacionales, en junio había 2 mil tomas, y en mil de ellas existía alguna construcción. Quienes entregan los paños también cobran por los servicios básicos.

CLAUDIO CERDA y ALEJANDRO NUÑEZ

El déficit actual de viviendas ha extendido la ocupación ilegal de terrenos, sobre todo por parte de familias de alta vulnerabilidad social, que a diario se ven expuestas a irregularidades y delitos como el arriendo y hasta venta de paños fiscales. Y luego, deben pagarles a estas mismas personas para tener acceso a servicios básicos como agua y luz.

Un panorama que han evidenciado pesquisas policiales y denuncias de habitantes de campamentos. "Siguen vendiendo terrenos detrás del cerro y también siguen arrendando. Les dijimos que no se podía hacer, pero hemos sufrido agresiones", dice una dirigente vecinal boliviana de un campamento del sector Centro Alto de Antofagasta.

De hecho, en redes sociales se mantienen hasta hoy avisos de venta de terrenos y viviendas en campamentos. "Son 8 metros de frente por 16 de fondo. Tiene 4 piezas, 1 baño, cocina, patio de lavado y tiene un árbol para tener días frescos en verano. Interesados, llamar", detalla una



EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA

publicación sobre la venta de una vivienda ubicada en una toma en Paipote, Región de Atacama.

Según datos del Ministerio de Bienes Nacionales, el registro de ocupaciones ilegales e irregulares en propiedad fiscal, identificadas al 30 de junio de este año, ascendía a 2.153, con una superficie de dos mil hectáreas. A esa misma fecha, la cartera reporta 1.216 ocupaciones para construcción de vivienda, en una extensión de 481 hectá-

reas. Es decir, más de la mitad de las ocupaciones de los terrenos fiscales son para instalar una vivienda.

Mientras que, durante el primer semestre de este año, Bienes Nacionales recuperó 22 inmuebles, con una superficie total de 146 hectáreas, y 12 terrenos, equivalentes a unas 145 hectáreas.

Isidora García, directora social de Techo-Chile, afirma que la crisis habitacional en el país requiere de una acción urgente

y focalizada en quienes permanecen en mayor vulnerabilidad y exclusión habitacional. "Es fundamental que se acelere el tranco de la construcción de viviendas sociales y su cantidad anual a nivel estatal. Para esto, se necesita suelo y financiamiento. La espera promedio para la entrega de proyectos de vivienda definitiva fluctúa entre cinco y quince años. Si a eso le sumamos las dificultades que las familias en campamento tienen para acceder a ellas, es im-

perativo ofrecer soluciones transitorias para el corto plazo", agregó.

Regiones del norte lideran el ranking

Según la cartera, el listado de ocupaciones ilegales e irregulares de este año es encabezado por la Región de Atacama (802), seguida por las de Tarapacá (412), Arica y Parinacota (248), Antofagasta (214) y Coquimbo (124).

Para enfrentar la carencia de viviendas, el Gobierno ha impulsado el denominado Plan de Emergencia Habitacional (PEH), del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que considera entregar 260 mil viviendas durante la actual administración.

Hasta hoy, ese plan lleva un 49% de avance, lo que significa que hay 126 mil hogares finalizados.

Otra arista que implica el déficit de viviendas es la expansión del crimen organizado que se da en este tipo de asentamientos, como se ha evidenciado en el campamento "Nuevo Amanecer" de Cerrillos (Región Metropolitana), considerado como uno de los principales focos de criminalidad en esta comuna.